<https://www.publico.es/sociedad/negocio-privado-caza-subvenciones-energia-comunitaria.html>

[summary: 2.300/2700 words]

**El negocio privado de la energía comunitaria**

Las grandes eléctricas han irrumpido en el sector de las comunidades de energía, inicialmente pensadas para democratizar las renovables desde la ciudadanía. A la cabeza figura Repsol, que gestiona más del 30 por ciento de las subvenciones concedidas por el Gobierno. De forma paralela y también al rebufo de los fondos públicos, un grupo de pequeñas empresas acapara cerca del 20 por ciento de las ayudas estatales.

*Ana Muñoz Padrós y J. Marcos*

El grupo Repsol gestiona más del 30 por ciento de las subvenciones europeas para comunidades de energía. En concreto, 24,3 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation para fomentar comunidades energéticas impulsadas por grupos ciudadanos han ido a parar a proyectos en los que aparece alguna de las filiales de la petrolera. Así lo desvela una investigación para este medio, que también ha identificado el *modus operandi* de un puñado de pequeñas empresas, calificadas como “caza subvenciones” por varias fuentes del sector y que acaparan el 18,4 por ciento de estas ayudas concedidas por Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el IDAE ha concedido desde 2022 más de 77,6 millones de euros en las cuatro convocatorias CE-Implementa. A la llamada han acudido colectivos locales y ciudadanos, pero también grandes empresas y otros actores privados. La injerencia preocupa a voces expertas nacionales e internacionales, pues evidencia una clara perversión del modelo de transición y descarbonización que apoyan las instituciones europeas. La Comisión Europea aprobó en [2018](https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf) y en [2019](https://www.boe.es/doue/2019/158/L00125-00199.pdf) sendas directivas para la creación de comunidades de energía, con el objetivo de que la ciudadanía produzca, consuma, almacene, comparta y venda energía renovable de forma comunitaria y descentralizada, siempre bajo parámetros sostenibles. La realidad es muy diferente.

El grupo Repsol es la punta de lanza de la cooptación de estos fondos públicos. Las filiales de la multinacional gestionan 28 de los 151 proyectos que han recibido las ayudas CE-Implementa. En concreto, su filial de renovables Edinor gestiona 15 de las comunidades subvencionadas (9,9 millones de euros), mientras Ekiluz, fruto de la alianza de Repsol con el grupo Mondragón, promueve 13 iniciativas (14,4 millones). El 60 por ciento de las subvenciones otorgadas en la [cuarta y hasta ahora última convocatoria CE-Implementa](https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=comunidades-energeticas&refsec=comunidades-energeticas&idarticulo=146974), resuelta en diciembre de 2023, fue a parar al grupo Repsol. Edinor y Ekiluz no reciben directamente estas partidas al no ser miembros de dichas comunidades de energía, en las que participan como gestores, promotores, diseñadores o socios tecnológicos.

“Repsol considera la generación distribuida una pieza clave en la transición energética. Es por ello que en los últimos años ha desarrollado diferentes modelos en torno a las comunidades energéticas”, aseguran por escrito fuentes de la empresa. El modelo no deja cabos sueltos y, entre otras cuestiones, uno de los requisitos impuestos en las iniciativas vinculadas a Ekiluz al ciudadano es que la distribuidora de electricidad sea la propia Ekiluz., es decir, el negocio termina beneficiando a Repsol. En paralelo a los proyectos de Edinor y Ekiluz, la petroquímica ha desarrollado otras 400 “comunidades solares” en colegios, centros de abastos y próximamente en parroquias.

Las Cámaras de Comercio han jugado un rol clave en la puesta en marcha del ‘modelo Repsol’, principalmente a través de sus contactos con alcaldías y gobiernos locales. Los ayuntamientos interesados suscriben un acuerdo de adhesión, ceden las cubiertas municipales y espacio vial, muchas veces sin sacarlos a licitación, y asumen las participaciones de la comunidad energética no adquiridas por la ciudadanía. Este impulso comenzó en Navarra, donde Edinor ya gestiona dos redes de comunidades energéticas locales (CEL), las llamadas Toda Navarra I y Toda Navarra II, con 26 y 37 ayuntamientos o entidades menores en su mano, respectivamente. De la Comunidad Foral se ha extendido al resto del Estado y, fruto de la colaboración entre Cámaras de Comercio, ya se han constituido 55 CEL que agrupan a 284 localidades de todo el Estado.

El coordinador de proyectos en el territorio de la Cámara de Comercio de Navarra, Pachi Yanguas, defiende por videollamada las facilidades técnicas y jurídicas de este patrón: “Se lleva hablando años de las comunidades energéticas, pero a la hora de colocar placas, a la hora de hacer la obra, a la hora de gestionarlo, no es fácil y por eso está costando. Vimos que Edinor podía resolver ese tema”. Esta solución contrasta claramente con los modelos nacidos desde la ciudadanía.

En línea con el derecho europeo, el IDAE destaca en su web que las comunidades energéticas son “principalmente un concepto social” y que con ellas “se evita la dependencia sobre las compañías eléctricas convencionales y se aumenta la competitividad en la industria”. La entidad confirma por correo electrónico que, para acceder a sus ayudas, el control efectivo de la comunidad de energía debe estar en manos de personas físicas, entidades locales y pymes, “actores que en ningún caso son grandes empresas energéticas”. Los límites son claros, pero no suficientes.

El Estado español todavía no ha implementado las directivas europeas aprobadas en 2018 y 2019, algo que debería haber hecho hace más de dos años. Se beneficia así a “los que ya tenían privilegios y estaban en una posición favorable”, subraya el abogado Jorge Andrey.

**Injerencia del oligopolio**

Y es que, Repsol no está sola en su apuesta por las comunidades de energía y los gigantes del sector energético también se han acercado o sumado a la moda. Hay que recordar que el [negocio de la luz en España](https://www.rosalux.eu/es/article/1953.luces-y-sombras-del-sector-energ%25C3%25A9tico-espa%25C3%25B1ol.html) está dividido en cuatro secciones: la generación y la comercialización, que están liberalizados, y el transporte y la distribución, que siguen regulados. El transporte, a modo de monopolio natural, pertenece a Red Eléctrica de España. En la distribución figuran las cuatro firmas que controlan el sector, en una situación que puede calificarse de oligopolio por zonas: Endesa, EDP, Iberdrola y Naturgy. Las cuatro se aprovechan del marco y del concepto de comunidad de energía para, con o sin subvenciones, vender con giros lingüísticos una supuesta energía en manos de la gente que poco tiene que ver con lo refrendado por Europa.

[…]

El desvío de fondos públicos para la creación de comunidades energéticas entronca en un contexto en el que los fondos europeos Next Generation acaban muchas veces en manos de las grandes empresas. Así [lo ha revelado recientemente la Fundación Civio](https://civio.es/2024/03/14/volkswagen-y-envision-las-mas-beneficiadas-por-subvenciones-en-2023/) que, analizando las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas en 2023, concluye que las energéticas fueron las grandes beneficiadas de las ayudas sin contraprestación.

La tendencia por las comunidades de energía ha calado en otras grandes eléctricas como Acciona, Capital Energy y Cepsa. […]

**Caza-subvenciones**

[…]

De los más de 77 millones de euros concedidos por las CE-Implementa, más de 14 han ido a parar a los 23 proyectos gestionados por alguna las empresas que esta investigación cataloga de ‘dudosas’ tras analizar la composición y las vinculaciones de cada uno de los proyectos subvencionados con otras entidades. Juntas, estas empresas acaparan el 18,4 por ciento de los fondos europeos concedidos por el IDAE: MásInteligencia (6,1 millones de euros), CEM-Comunidades Energéticas de Castilla-La Mancha (3,7), Sapiens (1,8), Senda (758 mil euros), CEL Management (737 mil euros), Valsolar (560 mil euros) y DS Consultores (549 mil euros).

Más de quince fuentes expertas consultadas para esta investigación coinciden en trazar con dos rasgos principales lo que hay detrás: perversión del espíritu con el que nacieron las comunidades de energía y, en el peor de los casos, acaparamiento de fondos públicos. “Han venido al olor de las sardinas. Son lobos con piel de cordero, unos con más estilo que otros. No has pestañeado y ya tienes todo hecho. Detrás hay empresas privadas que están haciendo negocio con las cubiertas públicas. Se aprovechan de las subvenciones para prostituir el modelo cooperativo”, denuncian Lorena Torres y Publio Galán, respectivamente, la vicepresidenta y el asesor jurídico voluntario de la cooperativa extremeña EnVerde.

Nada ilegal porque las convocatorias del IDAE permiten la participación de pymes(pequeñas y medianas empresas) a la hora de conformar comunidades de energía. Sin embargo, su *modus operandi* contrasta con la definición de las comunidades energéticas, que en la teoría deben ser organizaciones abiertas y democráticas en manos de la ciudadanía. Lo que en principio fue ideado como un modelo en el que la finalidad última era generar beneficios ambientales, sociales y económicos para las personas asociadas y para su entorno se ha convertido en otra forma de negocio, en ocasiones, subvenciones públicas mediante.

Sapiens, Senda, MásInteligencia y Valsolar son los nombres que más repiten las fuentes del sector consultadas, que también mencionan a Emececuadrado y Cambio Energético. Este medio ha contactado con todas ellas. Valsolar y Cambio Energético han decidido mantener el silencio; el resto reniega de la etiqueta ‘caza-subvenciones’ y defienden su labor como prestadoras de servicios.

[…]

**¿Para las personas o para el lucro?**

“Nuestra tarea radica principalmente en encontrar las subvenciones económicas adecuadas para los municipios. Queremos seguir expandiéndonos por todo el territorio nacional. Una réplica exitosa no puede ser como tal una copia”, aclaran por escrito desde la firma DS Consultores, que cuenta con un departamento de subvenciones, “especializado en la detección de ayudas”.

La perversión de la teoría se repite en otros países europeos, entre ellos, Bélgica y Portugal, países también analizados a fondo por esta investigación. “Hay una gran necesidad de renovables, cuantos más seamos mejor. Simplemente, las comunidades de energía no son la herramienta. El propósito de las comunidades energéticas es servir a un modelo de participación democrática, no al beneficio financiero privado”, dice Stanislas D’Herbemont, de la Federación europea de comunidades energéticas (REScoop.eu).

“Lo bonito de las comunidades de energía es que no hay una igual que otra porque cada una responde a lo que esa señora o ese papá necesitan en su pueblo. Por eso no nos valen modelos de arriba a abajo. Necesitamos modelos que escuchen las necesidades locales”, concuerda María Prado, responsable de Campaña de Renovables y Transición Energética de Greenpeace.

El hartazgo entre los colectivos de base que trabajan el tema de las comunidades de energía es evidente. Lo resume la ingeniera Esther Muñoz, una de las promotoras de la plataforma Ko-energia: “Ojalá se acabe pronto esta moda. La comunidad energética tiene una misión mucho más importante, que es empoderar a la ciudadanía, juntarla y recuperar las formas de conectividad que teníamos a través de la energía”.

**¿Futuro pelotazo en forma de venta?**

Begonte no tiene comunidad de energía. En este municipio gallego situado a escasa media hora de Lugo capital no existe ninguna comunidad energética, y eso que fue el segundo proyecto mejor valorado en la [convocatoria CE-Implementa 2](https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=comunidades-energeticas&refsec=comunidades-energeticas&idarticulo=146950), y eso que obtuvo una subvención a fondo perdido de casi dos millones y medio de euros en octubre de 2022, y eso que el plazo para la ejecución de las obras caducó en diciembre de 2023, y eso que la empresa que gestiona la comunidad energética, MásInteligencia, selló su compromiso con el Ayuntamiento. Begonte no tiene comunidad de energía, y eso que las ilusiones de las vecinas y los vecinos fueron abundantes.

El IDAE ha extendido siete meses el plazo inicial para arrancar el proyecto del que disponen MásInteligencia y todos aquellos proyectos beneficiados pero aún sin empezar de la segunda convocatoria de las CE-Implementa. Esta prórroga extraordinaria caduca el 7 de julio y para ese día necesitan materializar al menos el 50 por ciento de los planes previstos. Si no alcanzan ese mínimo, pierden la subvención.

Pedro Antonio Fuentes es el CEO y fundador de MásInteligencia. Asegura por teléfono que van a llegar “sobrados” y explica el retraso por problemas “de organización interna de los ayuntamientos” y también de financiación para completar el coste que no cubren las ayudas del IDAE, aproximadamente la mitad por proyecto. Fuentes asevera que todo eso ha quedado atrás y que ya cuentan con el apoyo “de varios bancos y entidades financieras”. A la hora de hablar de las comunidades energéticas que actualmente acompaña MásInteligencia, el CEO eleva la cifra al centenar además de otros cincuenta en polígonos industriales; “tenemos unas expectativas enormes, gigantes”.

Bajo condición de anonimato, una persona que conoce de primera mano el sector subraya que “la única posibilidad de llegar al mínimo es con fondos propios” porque los bancos no quieren asumir el riesgo. En ese escenario, explica que hay quienes han optado por la estrategia de abarcar la mayor cuota posible del mercado para, llegado el momento, vender a una tercera compañía. Cita como ejemplo a MásInteligencia.

“Soy el dueño de la compañía y no tengo pensamiento de vender mi empresa. Ni venderla ni dejar de construir los proyectos”, afirma el CEO de MásInteligencia, quien asegura que los ayuntamientos y socios lo han entendido perfectamente. Las cuentas de esta empresa consultadas por *Público* muestran una reciente ampliación de fondos propios.

José Ulla es el alcalde de Begonte. “Una vez conseguida la subvención empezaron a surgir todas las complicaciones posibles”, dice este regidor del PP. Habla de desamparo jurídico, de carencias legislativas y de problemas con la financiación. No duda de la buena voluntad de MásInteligencia, pero desliza que “se les fue un poco de las manos al intentar abarcar demasiado”. Todavía confía en alcanzar el mínimo para que no les quiten la subvención y “si no nos resuelven, habrá que explorar otras vías”.

No son pocas las voces que alertan de la burbuja que gira en torno a las comunidades de energía. Hay quienes van un paso más allá y, ante una posible venta buscando el pelotazo, apuntan a que “las grandes” siempre están al acecho para no perder su parte del pastel energético.